



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Luis Roberto Martínez Vanegas
DEMANDADO	Colpensiones EICE
RADICADO	05 001 31 05 003 2019 00697 01
TEMA	Reconocimiento pensión de vejez
DECISIÓN	Confirma auto

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anunciada, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a desatar el recurso de apelación presentado por el demandante en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente providencia.

Previo a descender en el fondo del asunto, se reconoce personería para actuar como apoderada sustituta de Colpensiones a la Dra. Luisa Fernanda Sánchez Nieto, con T.P. 329.278 del C.S. de la J., en los términos del poder allegado al plenario.

Pretensiones

Solicitó el demandante se declarara que le resulta aplicable el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU769-2014, y, en consecuencia, que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que cuenta con 1012.28 semanas en toda la vida laboral, y, por tanto, reúne los requisitos para ser merecedor de la pensión de vejez, en los términos del Decreto 758 de 1990.

A partir lo anterior, pidió que se condenara a la demandada a pagarle la pensión de vejez en forma retroactiva desde el 1.º de julio de 2009, junto con los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto, la indexación de las sumas adeudadas.

Hechos

Relató que nació el 7 de enero de 1949, se afilió al ISS el 11 de marzo de 1969, hizo parte de EPM entre el 18 de septiembre de 1989 y el 29 de noviembre de 1993, realizó cotizaciones al sistema como trabajador independiente desde el 1.º de septiembre de 1999, solicitó el reconocimiento de pensión de vejez el 9 de junio de 2009, y obtuvo respuesta negativa mediante Resolución 001322 de 2010, por lo que presentó demanda ordinaria laboral en la que esgrimió la existencia de más de 1000 semanas en cualquier tiempo, en aras de obtener el reconocimiento conforme la Ley 71 de 1988.

Agregó que en primera instancia el Juzgado Veinte Laboral del Circuito le concedió la prestación por vejez con base en 1000,16 semanas, decisión que fue revocada al conocerse recurso de apelación por la Sala Quinta de Decisión Laboral Piloto de la Oralidad de Medellín, por considerar que no cumplía los requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1990, sin que fuere casada al resolverse el recurso extraordinario por la Corte Suprema de Justicia.

Mencionó que para el 1.º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y reunía más de 750 semanas al 29 de julio de 2005, por lo que seguía siendo beneficiario del régimen de transición con posterioridad al 31 de julio de 2010.

Señaló que el 1º de abril de 2019 presentó nueva solicitud de pensión a Colpensiones, en aras de que se aplicara la sentencia CC SU769-2014, petición que fue resuelta de manera negativa en Resolución SUB

140144 de 2019, al considerarse que su aplicación estaba restringida a quienes cumplieran el derecho a partir del 16 de octubre de 2014, reconociendo un total de 1004,43 semanas, sin tener en cuenta 4.28 semanas de enero de 2007 ni algunos días correspondientes a los ciclos enero a junio de 2009, que agregan 3.57 semanas adicionales, para un total de 1012.28.

Destacó que cuenta con más de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, y 1000 semanas en toda la vida laboral, además de lo cual entiende aplicable la citada providencia CC SU769-2014, de la cual se apartó Colpensiones, quien violó los principios de buena fe y confianza legítima, al reconocerle 782.57 semanas inicialmente, luego 784.29 y después 788.

Indicó que no se configuraba la cosa juzgada, aun cuando hay identidad de partes, pero sin que se presentara identidad de causa y objeto, además de existir nuevos hechos, pruebas y pretensiones por el cambio jurisprudencial.

Finalmente, refirió que había solicitado la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez el 3 de julio de 2019, por no estar pensionado y vivir de la caridad, en razón a lo cual se le reconoció dicha prestación en la suma de \$13.005.130 con base en 788 semanas cotizadas, sin tener en cuenta los tiempos servidos a EPM.

Contestación

Colpensiones EICE al dar respuesta al libelo genitor, se opuso a las pretensiones, luego de lo cual aceptó la fecha de nacimiento del demandante, el momento en que se afilió al ISS, su vinculación con EPM, las cotizaciones realizadas como independiente, la solicitud pensional, la negativa dada por la entidad, la demanda ordinaria laboral presentada, las decisiones adoptadas dentro del trámite judicial, la segunda petición de pensión elevada en 2019, la nueva respuesta desfavorable que se dio, la reclamación de indemnización

sustitutiva de pensión de vejez, y su reconocimiento en sede administrativa.

En torno a los demás supuestos, indicó que no le constaban o no correspondían a verdaderos hechos, para pasar a presentar las excepciones que rotuló de la siguiente manera: cosa juzgada, «*inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir el reconocimiento y pago de una pensión de vejez*», compensación, prescripción extintiva, «*improcedencia del reconocimiento del retroactivo pensional y de los intereses moratorios y/o indexación de la condena*», buena fe de Colpensiones, e imposibilidad de condena en costas.

Decisión de primera instancia

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 18 de julio de 2022, declaró probada la excepción de cosa juzgada, al considerar que se daban los presupuestos establecidos por la ley para su ocurrencia, a partir de lo cual ordenó la terminación del proceso y el archivo de las diligencias.

Apelación

La decisión adoptada en primera instancia fue recurrida por el apoderado del demandante, quien como sustento de su inconformidad señala que no opera la cosa juzgada, en la medida que se esta pidiendo la pensión de vejez, pero con fundamentos nuevos, donde se incluyen nuevas pretensiones declarativas. También expone la falta de respeto de la entidad, que esta en mejor posición, frente a un afiliado, quien cumple con el deber de cotizar sus semanas y solicita la prestación económica, donde si por cualquier motivo no se le tomaron ciertos septenarios y se demandó confiado en ese acto administrativo, pero posteriormente aparecen nuevas semanas que reflejan más de 1000 semanas cotizadas.

Alegatos

Vencido el término para la presentación de alegaciones, se verificó la entrega de escrito por la parte demandada, donde señaló lo siguiente:

Se hace necesario establecer que en el presente proceso se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que el demandante presentó demanda ordinaria laboral de primera instancia bajo el radicado 050013105002020100036600, pretendiendo que el ISS hoy “Colpensiones”, le reconociera y pagara la pensión de vejez sumando tiempo públicos y privados, reconociendo dicha prestación bajo los parámetros del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1 de julio de 2009, mesadas adicionales de junio y diciembre, intereses moratorios, costas y agencias en derecho. El Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 07 de julio de 2011, resolvió el recurso de apelación presentado por la demandada a la sentencia de primera instancia, absolviendo al ISS de las pretensiones formuladas por el demandante, al considerar que, “El señor MARTINEZ VANEGAS cuenta con periodos laborados al sector público (Empresas Públicas de Medellín E.S.P.), sin cotizaciones al ISS, entre el 18 de septiembre de 1993, para un total de 1.428 días o 204 semanas (folios 8). Y directamente aportadas al ISS, a través de empleadores privados cuenta con 784,29 semanas, de las cuales 312,43 semanas, corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad.

El demandante entonces, no sería beneficiario del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año como aduce en la demanda, ya que no cumple con el requisito de tener cotizadas quinientas (500) semanas de cotización en los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de sesenta (60) años de edad, ni mil (1000) semanas en cualquier tiempo.”

CONSIDERACIONES

Se revisará la decisión de primer grado, proferida dentro de la etapa de decisión de excepciones previas, dentro de la cual se tuvo por probada la excepción de cosa juzgada, lo que motivó que la parte actora manifestara su inconformidad con lo resuelto.

En este orden de ideas, en esta oportunidad el tema frente al cual debe pronunciarse la Sala recae puntualmente en establecer si bajo unos presupuestos de índole fáctica, están presentes o no los elementos de la cosa juzgada, sin que se advierta en un yerro de índole formal en lo que se refiere a adoptar tal decisión, en el momento que dispuso el *a quo*, debido a que se ajusta a lo previsto por el artículo 32 del CPTSS.

La figura de la cosa juzgada no se encuentra regulada dentro de la norma procesal laboral, motivo por el cual, a partir de lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS, es necesaria la remisión al artículo 303 del CGP, norma que estipula lo siguiente:

ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

Debe recordarse, que uno de los efectos más relevantes de la institución de la cosa juzgada, es el saber que con ella se premia la seguridad jurídica, y de paso se reconoce la inmutabilidad de la decisión. Sobre el particular, puede verse lo expresado por el doctrinante Hernán Fabio López Blanco en su Obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Editorial Temis, 3ª. Edición, pág. 325 y 326:

“En todo caso, repetimos, cualquiera que sea la posición que se adopte frente a la naturaleza jurídica de la cosa juzgada, es lo cierto que ella tiene estos importantes efectos:

1. Salvo precisas excepciones legales, impide volver a plantear las mismas pretensiones ante la autoridad judicial.”
2. Lo decidido en la sentencia no puede ser modificado ni siquiera por el mismo juez que la profirió; o sea, que la sentencia es inmutable.”
3. Si la parte a cuyo cargo se ha impuesto una prestación se niega a satisfacerla, se puede acudir a la fuerza para obtener su cumplimiento, aun cuando –y esto debe tenerse muy en cuenta- ese cumplimiento queda exclusivamente al arbitrio de la parte interesada, sin que pueda el Estado, a lo menos dentro de la actual situación de cosas, obtener, prescindiendo de la petición del interesado, el cumplimiento de la sentencia que dictó”.

Por su parte, con relación a este asunto específico, se ha expresado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL3046-2020, de la siguiente manera:

En efecto, una decisión absolutoria ejecutoriada no pierde esa condición de inmutabilidad que le otorga el instituto de la cosa juzgada, por el simple hecho de que la parte interesada no obtenga el derecho que pretende o porque considere que existió alguna indebida valoración de las pruebas o no se contó con el material probatorio suficiente, pues lo cierto es que un juicio adelantado en esa forma, con todas las garantías propias del debido proceso, entre ellas la de aportar y controvertir las pruebas que den base al derecho reclamado, termina definitivamente y representa una respuesta jurisdiccional intangible, que no puede revivirse indefinidamente según el capricho de las partes.

Esta sala de la Corte ha reivindicado la fundamental importancia del instituto jurídico de la cosa juzgada y ha resaltado, en dicha medida, que:

La institución de la cosa juzgada, con la que se delimita un derecho y se definió un conflicto, mediante una sentencia, tiene el carácter de inmutable, es imperativa y debe ser respetada por todos los sujetos procesales en orden a lograr la seguridad jurídica y la convivencia pacífica; no puede el recurrente, después de que se analizó y definió judicialmente una pretensión, con todas las garantías constitucionales y legales, pretender que se resquebraje el principio imperturbable de la cosa juzgada, buscando, un nuevo pronunciamiento que acceda a sus intereses. (CSJ SL, 10 feb. 2009, rad. 35327).

Igualmente, ha dicho la Corte que:

[...] la fuerza de la cosa juzgada --denominada también ‘res iudicata’-- se impone por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, cuando quiera que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto (eadem res), se funda en la misma causa que aquél donde se profirió la sentencia (eadem causa petendi) y entre ambos hay identidad jurídica de partes (eadem conductio personarum -- eadem personae).

Razones de orden mayor imponen la necesidad de evitar ventilar nuevamente un mismo litigio cuando sobre éste ya se ha asentado de manera definitiva el pensamiento de su juzgador natural, por manera que, al tenerse por superada la controversia mediante la sentencia judicial en firme, ésta adquiere las características de ‘definitividad’ e ‘inmutabilidad’, que al lado de tener por solucionado el conflicto, otorgan a las partes comprometidas certeza del derecho discutido y seguridad jurídica sobre lo decidido.

Pero para que la cosa juzgada adquiriera la fuerza que persigue la ley, no basta que solamente una o dos de las identidades antedichas se reflejen en el nuevo proceso; como tampoco, para negarla, que por la simple apariencia se desdibujen los elementos que la conforman, esto es, el objeto del proceso, la causa en que se funda y los sujetos entre quienes se traba la disputa. Por eso, para que se estructure la cosa

juzgada, de una parte, deben concurrir, necesariamente y en esencia las tres igualdades anotadas, y, de otra, deben aparecer identificados claramente los elementos que las comportan.

La cosa juzgada es una institución que por perseguir los objetos de certeza y seguridad jurídica anunciados, así como puede ser alegada por la parte interesada desde el mismo umbral del proceso a través de las llamadas excepciones previas que por sabido se tiene tienden a impedir el adelantamiento irregular del proceso, también puede ser declarada oficiosamente, aún en la segunda instancia, pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil --artículo 282 del nuevo Código General del Proceso--, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que concede al juzgador dicha posibilidad, salvo las consabidas restricciones respecto de la nulidad, la compensación y la prescripción, las cuales deben ser siempre alegadas, no puede entenderse derogado por la vigencia del artículo 66 A del código procedimental últimamente citado. Por manera que, en cuanto a dicha alegación no asiste razón alguna a los recurrentes, dado que, como se ha asentado, la cosa juzgada interesa al orden público y, por tanto, bien pueden los jueces de segundo grado declararla, aún, de oficio. (Sentencia CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39366, reiterada, entre otras, en la CSJ SL17406-2014).

Finalmente, la Corte ha precisado que:

[...] no es dable confundir la causa petendí con las pruebas en que se apoya aquella, porque además de que la Ley se refiere es a la identidad de causa y no de medios, de aceptarse, cualquier controversia ya desatada y con los mismos supuestos fácticos, se podría reiniciar cualquier proceso con la aducción o aportación de nuevas pruebas, lo cual iría en contravía de la intangibilidad de las decisiones judiciales y de la seguridad jurídica que impone la cosa juzgada que a su vez confiere a las partes la certeza de haberse resuelto el conflicto en que se vieron comprometidas. (CSJ SL, 5 ag. 2004, rad. 22750). (Cursiva fuera del texto original):

Descendiendo al caso en concreto, encontramos que realmente confluyen los 3 elementos propios de la institución de la cosa juzgada.

1. Subjetivo: En cuando al aspecto subjetivo aun cuando la demandada inicialmente fuera el ISS y hoy lo sea Colpensiones, no puede llevar al equivoco de considerar que se trata de distintos demandados, en la medida que lo que operó fue en cambio en la persona jurídica que asumía la obligación a partir de la liquidación del ISS. A ello se suma el que la parte actora está conformada en ambos asuntos por Luis Roberto Martínez Vanegas.

2. Causal: En el ámbito causal, también se encuentra identidad, puesto que se reclama la condición de beneficiario del régimen de transición que le asiste al actor, y como consecuencia de ello, que se otorgue el derecho a la pensión de vejez. Es de advertir que aun cuando en la demanda inicial de 2010 se pretendía la suma de tiempos públicos con semanas cotizadas bajo la Ley 71 de 1988, y en la reclamación que hoy es objeto de análisis se menciona el Decreto 758 de 1990, no puede dejarse de advertir que la posibilidad de aplicar esta última disposición expresamente hizo parte de la discusión de ese primer litigio, lo que quiere significar que ya hubo un funcionario judicial competente, quien definió si era o no viable tener en cuenta esa sumatoria a efectos de acreditar un derecho bajo las postulados del Acuerdo 049 de 1990.
3. Objetivo: En cuanto al objeto, esto es, la pretensión, también se presenta identidad al buscarse el reconocimiento de una pensión de vejez dentro del sistema de seguridad social en pensiones, a partir del 1.º de octubre de 2009, junto con los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Frente a estos aspectos debe indicarse, que aun cuando dentro del libelo genitor se manifiesta que la sumatoria de tiempos públicos y privados no fue objeto de estudio con la sentencia dictada por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, revocada luego por esta corporación, lo cierto es que el tema si fue abordado al indicarse en la sentencia de primera instancia lo siguiente:

[...]

Supuesto lo anterior, se deduce sin hesitación alguna, que el caso en estudio debe dirimirse a la luz del Decreto 758 de 1990, puesto que el demandante, para el 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años, como ya se dijo.

Es de anotar que recientemente, el Honorable Tribunal Superior de Medellín Sala Decimotercera de Decisión Laboral, en Sentencia del 30 de abril de 2008, proferida dentro del proceso Radicado con el N° 2006-00488 expresó sobre el particular la acumulación de tiempos para acceder a la pensión de vejez:

[...]

De la prueba documental arrimada al expediente por la parte actora, se puede apreciar copia de la historia laboral emitida por el Instituto de Seguros Sociales (fs. 11-16, 94-95 y 104-106), los mismos que en ningún momento fueron controvertidos, ni tachados de falsos por el Ente demandado, y por ello se han de presumir ciertos; documentación ésta de la cual se colige que el señor LUIS ROBERTO MARTÍNEZ VANEGAS, durante toda su historia laboral, cotizó un número equivalente a 998.1514 semanas.

Ahora bien, de la contestación que al libelo demandatorio diera el Instituto de Seguros Sociales, se concluye que el motivo principal, por el cual se deniega la prestación económica solicitada por el actor, es por cuanto no reunía el requisito del número de semanas exigido por la Ley, pues se encuentra plenamente probado que el actor cuenta con más de 60 años, los cuales cumplió el 7 de Enero de 2009.

Y siendo así, para el caso a estudio, de la copa de la Historia Laboral expedida por el Instituto de Seguros Sociales, la que como se dijo, no fue controvertida por el Ente Accionado, se deduce sin hesitación alguna, que el señor Martínez Vanegas, cotizó 998,1514 semanas, durante toda su vida laboral, pues como se desprende de dichos documentos, el actor, estuvo al servicio de varios empleadores, entre el año 1969 y el año 2008.

[...]

Desciendo al caso bajo estudio, y tal como se demuestra con la sumatorias (sic) de semanas, tenemos que el bono pensional de 204 semanas, las 784,29, más las 12.87 semanas que no fueron tenidas en cuenta en las historias laborales que obran a folios 104 y SS, pero que constan en la historia laboral obrante a folios 14 -16 del expediente, tenemos que suman en total 1001,16 semanas cotizadas, durante los últimos 20 años anteriores al cumplir los 60 años como edad mínima para pensionarse.

Así las cosas, no otra determinación puede tomarse, que la de condenar a la entidad demandada a reconocer al Señor LUIS ROBERTO MARTINEZ VANEGAS, una pensión de vejez, a partir del 7 de Enero de 2009, momento para el cual cumplió la edad mínima requerida (60 años). Igualmente, se le habrá de pagar la misma en cuantía mensual de un salario mínimo legal, más las mesadas adicionales de junio y diciembre, los incrementos de ley.

Por su parte, en lo que se refiere a la decisión de segunda instancia, se destaca:

Corresponde a la Sala establecer si, en aplicación al Régimen de Transición Pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es posible sumar el tiempo servido en el sector público, y cotizaciones al ISS para obtener la pensión. La respuesta de esta Sala de Decisión, es negativa, por las siguientes razones:

No se discute, además de estar debidamente probado, que el demandante nació el 7 de enero de 1949, es decir que tenía más de 40 años de edad al 1° de abril de 1994, fecha de la vigencia de la Ley 100 de 1993, en pensiones. En principio, es beneficiario del Régimen de

Transición Pensional, establecido en el artículo 36 de dicha codificación.

[...]

El señor MARTINEZ VANEGAS cuenta con periodos laborados al sector publico (Empresas Públicas de Medellín E.S.P.), sin cotizaciones al ISS, entre el 18 de septiembre de 1989, hasta el 29 de noviembre de 1993, para un total de 1.428 días ó 204 semanas (folios 8). Y directamente aportadas al ISS, a través de empleadores privados, cuenta con 784,29 semanas, de las cuales 312,43 semanas, corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de 60 años de edad.

El demandante entonces, no sería beneficiario del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año como aduce en la demanda, ya que no cumple el requisito de tener cotizadas quinientas (500) semanas de cotización en los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de sesenta (60) años de edad, ni mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

Consecuente con lo anterior, la normatividad aplicable al caso del demandante, es la Ley 100 de 1993, artículo 33, y demás normas que la modifican o adicionan, acorde con la cual es factible sumar tiempos de servicio en entidades del Estado, con cotizaciones al ISS. Sobre el tema se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 19 de noviembre de 2007, Radicación N° 30694, Magistrado Ponente, Doctor FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ, así:

[...]

Si miramos lo desarrollado en la sentencia de primera instancia, se plantea que el actor reunía más de 1000 semanas entre cotizadas y laboradas sin aporte, permitiendo la sumatoria para reconocer el derecho a la pensión bajo las exigencias del Decreto 758 de 1990, situación que no compartió en su momento el ad quem, quien, al revisar el tema en apelación, estableció que dicha sumatoria no era procedente, atendiendo a la posición de la Corte Suprema de Justicia para ese momento.

De igual manera considera esta Sala, tal como lo señaló el *a quo*, que la emisión de una providencia judicial, aun cuando provenga de una alta corte, no tiene la virtualidad de desconocer el alcance de la cosa juzgada, tal como ocurre en este evento, sin que al analizar la prosperidad de este medio exceptivo sea del caso estudiar la justicia o no de la decisión que se encuentra ejecutoriada.

También es necesario precisar, tal como lo hiciera la Corte Suprema en la decisión atrás referenciada, que la presencia de nuevos elementos de prueba, como lo serían actos administrativos o historias laborales que incluyen semanas adicionales (1004 o 1012), en principios no desnaturalizan la figura de la cosa juzgada. Por lo menos tal situación no se presenta en este evento, en la medida que finalmente lo pretendido es que se reconozca una pensión bajo el Decreto 758 de 1990 sumando semanas cotizadas al ISS con periodos laborados y no aportados, punto específico respecto del cual ya se pronunció la judicatura en una decisión que esta ejecutoriada, pues realmente la negativa en su momento no estuvo fundada en la no presencia de 1000 semanas entre cotizadas y no aportadas, sino en la imposibilidad de acumularlas bajo el régimen pretendido.

De esta manera, se considera que se encuentran plenamente establecidos los requisitos que se exigen para que tenga presencia la cosa juzgada, por lo que se comparte lo resuelto por el juez de primer grado.

En consecuencia, es del caso confirmar la decisión de primera instancia, en los términos antes reseñados, además de lo cual procede la imposición de costas procesales en esta sede, en consideración a que no prospero el recurso de apelación presentado por la parte actora. Se fijan agencias en derecho en la suma de \$380.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 18 de julio de 2022, en el proceso instaurado por Luis Roberto Martínez Vanegas contra Colpensiones.

SEGUNDO: Costas según lo indicado en la parte considerativa.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ